

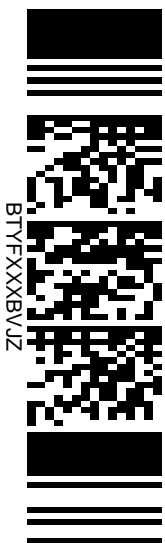
C.A. de Santiago

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que comparece don Patricio Santelices Abarzúa, en representación de Transbank S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, indistintamente) y deduce reclamo de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N° 7144, emanada del Consejo Comisión para el Mercado Financiero, dictada el 6 de diciembre de 2021, solicitando se lo acoja íntegramente y se declare que el acto reclamado se deja sin efecto conforme los argumentos que expone.

Invoca como antecedentes del reclamo entablado que el 27 de enero de 2020, mediante una Carta enviada al Presidente de la CMF, Transbank S.A. solicitó pronunciamiento en relación con ciertas funciones que realizaría en el contexto de la facilitación del servicio de emisión de boleta electrónica de ventas y servicios (BVE, indistintamente) afectas al Impuesto al Valor Agregado (IVA, indistintamente) a sus clientes asociados, con independencia del medio de pago utilizado en la transacción que le dé origen, con el objeto de confirmar que dicha actividad, esto es, la facilitación de la plataforma tecnológica de Transbank S.A. para que un tercer proveedor debidamente inscrito ante el Servicio de Impuestos Internos como emisor de BVE pudiera ofrecer este servicio a sus comercios afiliados, se encuentra comprendido dentro del giro específico de Transbank S.A., en cuanto sociedad de apoyo al giro bancario (SAG, indistintamente), o que se autorizare de la manera que se estimara pertinente.



Expresa que el 15 de julio de 2021, Transbank S.A. realizó una nueva presentación ante la CMF, en la que informó que en octubre de 2020 comenzó a facilitar sus redes y plataforma tecnológica a la empresa emisora de BVE, Acepta S.A. y que tal como se indicó en dicha presentación, la emisión de la BVE es ejecutada por Acepta S.A., mientras que Transbank S.A., solo provee una infraestructura tecnológica y los canales para que aquella empresa preste el servicio de BVE al comercio afiliado.

En este contexto, refiere que el día 15 de octubre de 2021, por orden del Consejo de la CMF, el señor Director General de Regulación Prudencial suscribió la Carta N° 92108418 (Carta respuesta, , indistintamente) en la cual señaló que la emisión de BVE afectas al IVA es una actividad que no se encuentra autorizada ni por la ley, ni por la normativa de la Comisión, para ser desarrollada por una SAG como Transbank S.A.

Narra que la respuesta de la CMF, además, indicó que las SAG pueden hacer entrega de la información relativa a los pagos realizados con los medios que opera al comercio afiliado a un tercero, previa autorización del referido afiliado, para emitir las boletas electrónicas y facilitar la integración de los medios electrónicos. Sin embargo, en concepto del impugnante, no resulta compatible la transmisión de información de operaciones ajenas a los medios electrónicos operados por Transbank S.A., como es el caso de las transacciones en efectivo.

Arguye que la CMF intentó sustentar dicha conclusión en lo dispuesto, tanto por la Ley General de Bancos como en la Ley sobre IVA, indicando:



- (i) En primer lugar, que las SAG, de conformidad con el artículo 74 de la Ley General de Bancos, solo se encuentran autorizadas a realizar las operaciones que por ley pueden efectuar los bancos, dentro de las que no se encuentra la emisión de BVE; y,
- (ii) En segundo término, que, de conformidad con el artículo 54 de la Ley sobre IVA (Decreto Ley N° 825), la obligación de integrar los sistemas de pago recae sobre el comercio afiliado –o contribuyente– y se circunscribe solo a aquellas transacciones pagadas por medios electrónicos; norma tributaria que en ningún caso permitiría ampliar los fines acotados que pueden tener las SAG, al pretender extender estos últimos a la prestación de servicios que se encuentran fuera de las operaciones que los bancos pueden efectuar.

Al respecto expresa el impugnante que el 22 de octubre de 2021, Transbank S.A. interpuso un recurso de reposición en contra de la respuesta de la CMF, solicitando que ésta se dejara sin efecto, en virtud de diversas consideraciones. Indica que, en relación con lo anterior, la CMF, rechazando en todas sus partes la reconsideración promovida, estimó que Transbank S.A. no aportó suficientes antecedentes que permitieran acreditar que la facilitación de su plataforma tecnológica para la emisión de BVE se encuentre dentro de su giro como SAG y operadora de tarjetas y que, en suma, la Resolución recurrida se encuentra suficientemente fundamentada, cumpliendo todos los estándares exigidos por el Derecho Administrativo.



Asimismo, señala que, en relación con la omisión de solicitud de informe al Servicio de Impuestos Internos (SII, indistintamente), la resolución recurrida entiende que no se cumplen los requisitos del artículo 37 bis de la Ley N° 19.880, en tanto, en opinión del ente público, el acto administrativo no es de carácter general –por estar solo destinado a Transbank S.A.– y no produce efectos claros en los ámbitos de competencia de otro organismo –debido a que la Comisión no se inmiscuyó en las facultades del SII.

El compareciente funda su reclamo en que la Resolución N° 7144 incurrió en una serie de vicios de legalidad que desglosa conforme los siguientes capítulos.

En primer término, aduce la impugnante que el mencionado acto resolvió de manera incorrecta la aplicación de la legislación que rige la actividad de la Compañía Transbank S.A., e infringió, asimismo, la Ley N° 19.880, al no fundamentar debidamente su decisión ni requerir informe a la autoridad sectorial correspondiente, esto es, el SII, tratándose del único órgano competente para interpretar la normativa tributaria, en la que expresamente se basa la Respuesta CMF para rechazar la solicitud de Transbank– lo que significó una inaplicación del artículo 37 bis de la Ley N° 19.880.

Denuncia como vulneradas con la dictación de la Resolución N° 7144, además, el artículo 74 de la Ley General de Bancos, analizada de forma conjunta con el Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF, en cuanto Transbank S.A. justificó que la forma de operación objeto de la Carta se encontraba dentro de su giro exclusivo y proporcionó los antecedentes para acreditarlo y, a pesar de ello, fue rechazada su actuación de facilitadora para la transmisión de información en el



contexto del servicio para la emisión de BVE prestado por un tercero debidamente autorizado. Indica que, por otro lado, la Resolución recurrida infringió, además, el deber de fundamentación y motivación consagrado en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, sin tener los suficientes elementos de juicio para poder decidir de la forma en que lo hizo.

En cuanto a la forma en que se han producido las infracciones legales reclamadas, sostiene que Transbank S.A. aportó argumentos para dar cuenta de que el artículo 74 de la Ley General de Bancos, en relación con el Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF, permite que una SAG preste un servicio consistente en facilitar su plataforma tecnológica para la transmisión electrónica de información de pago que, a su vez, habilita a un tercero a prestar el servicio de BVE a sus comercios afiliados.

Añade que Transbank S.A., al ser también una empresa operadora de tarjetas de pago, puede llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias para desarrollar el objeto exclusivo de su giro, sin necesidad de autorización especial, como, por ejemplo, la autorización y registro de las transacciones efectuadas con las tarjetas que opere, la provisión de plataformas o canales electrónicos para el funcionamiento de dichas tarjetas o la afiliación a establecimientos comerciales, ya sea a nombre propio o en calidad de mandatario complementario, según precisa la Circular N° 1 de la CMF, toda vez que ésta no es taxativa al señalar las actividades que son necesarias para desarrollar el giro operador, pues utiliza la expresión “como puede ser el caso”. Sumado a lo anterior, la Resolución N° 7144 nada expresó en relación con que la actividad



en cuestión sí se encuentra dentro de aquellas contempladas en el objeto estatutario de la Compañía autorizado por la CMF.

Reitera que la Resolución N° 7144 no se hace cargo de los argumentos planteados en la reposición, y mantiene la interpretación impropriamente restrictiva y poco razonable de la Ley General de Bancos que, según reclamó, se verificó en la respuesta de la CMF, sin otorgar mayores fundamentos para legítimamente descartar que la actividad desplegada por Transbank S.A. se encuentra dentro de su giro exclusivo en cuanto SAG y en cuanto operadora de tarjetas de pago.

Invoca, como segundo capítulo de objeción, la inobservancia del artículo 3° del Decreto Ley N° 211, pues al ser parte del orden público económico, esta previsión se aplica tanto a los particulares, como a las propias autoridades, esto es, a todos los órganos de la Administración del Estado que intervienen en materia económica, los que deben tener presente los propósitos de favorecer la existencia de mercados no concentrados y la libertad de elección de los usuarios finales. Discurre en orden a que, en este caso, precisamente lo que se está cuestionando se refiere a las limitaciones al ejercicio de una actividad económica de las SAG que se derivan, no del carácter literal de la ley, sino de la interpretación ilegítimamente restrictiva que la CMF realiza de ella, deduciendo limitaciones que no se encuentran expresamente establecidas en la normativa.

Refiere que dentro de las actividades autorizadas por la CMF para ser realizadas por las SAG, se encuentran la de operación de terminales de caja y puntos de venta, servicios de interacción electrónica orientados a la realización de operaciones comerciales y financieras entre empresas, servicios de registro de las transacciones



que efectúen los titulares o usuarios de tarjetas de crédito, débito y pago con provisión de fondos, servicios de transferencia electrónica de información, la recaudación de pagos de impuestos u otros derechos y otros servicios vinculados con los sistemas de pago, destacando que lo que realiza Transbank S.A. en el marco del servicio conforme con su giro autorizado es facilitar su red para transferir electrónicamente la información de pago desde el punto de venta al proveedor del servicio de BVE. Así, cuando la CMF indica que esto no forma parte del giro autorizado de las SAG, está realizando una interpretación impropia y restrictiva de la Ley General de Bancos y de su propia normativa (Recopilación Actualizada de Normas de la CMF), incluso contraviniéndola.

Acota que es precisamente por lo anterior que en la reposición entablada contra la Carta de respuesta N° 92108418, se indicó que, dados los riesgos de afectación a la libre competencia en el mercado de la operación de tarjetas, era indispensable que la CMF revisara, a la luz de aquella, el contenido de la interpretación sostenida; así como que, de mantenerse una interpretación arbitrariamente restrictiva, se producirían perturbaciones al normal y adecuado funcionamiento del mercado de los servicios de operación de tarjetas, afectando, con ello, la libre competencia.

En tercer lugar, el impugnante invoca los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, en cuanto se infringe con el acto contra el que se alza el deber de motivación por falta de coherencia interna en su intento de justificación y, por el otro, no se hace cargo de los argumentos planteados en la Reposición. Al efecto, aduce que la Resolución N° 7144 no fundamenta adecuadamente su decisión, pues simplemente señalar que “considera” que el acto recurrido “se



encuentra suficientemente fundamentado”, sin haberse hecho cargo de los argumentos de Transbank S.A., lo que no basta para justificar el rechazo del recurso de reposición.

En cuarto lugar, reitera la infracción al artículo 37 bis de la Ley N° 19.880 y el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, toda vez que, el carácter particular del acto no puede sustentarse en un argumento meramente formal, como aquel que indica que éste se encontraba dirigido a un solo destinatario, cuestión que no es efectiva, por tratarse el acto recurrido de una resolución que produce efectos permanentes y generales respecto de todas las SAG. Alega que la CMF no consultó al SII, quien es el órgano administrativo en cuyo ámbito de competencia se enmarca la interpretación y aplicación de las normas tributarias que sostienen el criterio planteado en el caso de la especie –porque, recordemos, el acto recurrido invoca, además de la Ley General de Bancos, la Ley sobre IVA–. Tampoco lo hizo, a pesar de la petición expresa en ese sentido efectuada en la Reposición, oportunidad en la que, por cierto, se dio cuenta de los objetivos de mayor recaudación fiscal que pretende el SII por medio del servicio de envío o facilitación de BVE. De consiguiente, según refiere el compareciente, la Resolución N° 7144 ha persistido en dicha infracción, al no requerir informe según fue solicitado por Transbank S.A., y simplemente entender que en este caso no se aplicaría el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880.

Afirma que, en circunstancias que era el SII quien debía determinar el sentido, alcance y eventual aplicación de las normas de la Ley sobre IVA que invoca la Respuesta de la CMF, resulta ilegal que tal comunicación se haya expedido sin que dicho servicio





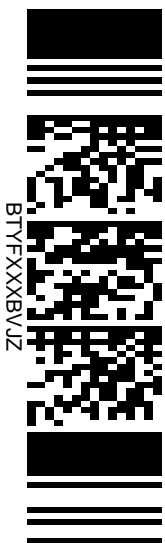
se pronunciase o informase al efecto, con el propósito de precaver un conflicto normativo.

Finalmente, invoca que el perjuicio que la Resolución impugnada irroga a Transbank S.A. es, ante todo, de carácter económico, por impedirle continuar con actividades que motivaron grandes inversiones y se materializa como consecuencia del rechazo de la reposición interpuesta en contra de la Carta respuesta de la CMF, ratificándose, por medio de la Resolución N° 7144 los vicios de los que adolece la mencionada comunicación. Añade que lo resuelto por la CMF no sólo afecta a la relación comercial de Transbank S.A. con Acepta S.A., sino que a todos los comercios afiliados que han contratado el servicio de BVE, que mantienen contratos suscritos para la prestación de este servicio, mediante el cual se han emitido, a septiembre de este año, más de 100 millones de documentos tributarios.

Conforme lo expuesto, pide se acoja íntegramente el reclamo contra la Resolución N° 7144 y, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho referidos, se la deja sin efecto, con costas.

**Segundo:** Que compareció doña Carolina Vásquez Rojas abogada procuradora fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), contestando el reclamo y pidiendo su rechazo, con costas, conforme los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que expone.

Invoca como cuestión preliminar que la Carta respuesta de la CMF N° 92108418, de 15 de octubre del año 2021, está firme y no es materia de este reclamo, en cuanto éste se dirige contra la Resolución Exenta N° 7.144, de 6 de diciembre de 2021, por la que



la CMF rechazó, en todas sus partes, la reposición deducida contra la Carta N° 92108418, de 15 de octubre del año 2021, la que se encuentra firme y ejecutoriada por haber transcurrido el plazo de 10 días del citado artículo 70 para su impugnación.

Conforme lo anterior, afirma que a la Comisión le corresponde única y exclusivamente contestar el reclamo respecto de la Resolución Exenta N° 7.144, de 6 de diciembre de 2021. Así, y en el evento que se declare la ilegalidad del acto reclamado, la Carta que se pronunció respecto a la consulta de Transbank S.A. y que concluye que la emisión de boletas electrónicas de ventas y servicios afectas al impuesto al valor agregado es una actividad que no se encuentra autorizada ni por la ley ni por la normativa de la CMF para ser desarrollada por Transbank S.A., quedará plenamente vigente, por cuanto el presente reclamo de ilegalidad no se dedujo contra dicho acto administrativo.

En este sentido, Transbank S.A. no impugnó el acto administrativo que estimaba ilegal y le causa el supuesto perjuicio, recurriendo de reclamo de ilegalidad del artículo 70 del DL. 3538, por lo que su derecho a reclamar a este respecto precluyó por falta de oportunidad, convalidando tal acto.

Sobre el fondo, contesta el reclamo invocando el marco normativo aplicable a la controversia, concluyendo que el inciso 1° del artículo 74 de la Ley General de Bancos establece lo siguiente:

- (i) Las SAG tienen, como "único objeto", alguna de las actividades económicas descritas en los literales a) y b) de la norma en comento. De ahí cabe concluir, entonces, que la exigencia de giro único de dichas



entidades no es un capricho de la CMF, sino que se trata de una exigencia legal insoslayable.

- (ii) Las actividades descritas tanto en el literal a) como en el b) de la norma indicada, dependen, a su vez, directamente de las actividades económicas que, legalmente, los bancos pueden llevar a cabo, contempladas en el artículo 69 de la Ley General de Bancos, desde que "los fines de las entidades financieras" (letra a) no son sino aquellas actividades que los bancos pueden desarrollar; mientras que el enunciado "determinadas operaciones de giro bancario" (letra b) es ya una referencia más explícita a las operaciones taxativas que pueden ejecutar los bancos. Así entonces, las actividades que las SAG pueden desarrollar dependen del giro bancario.
- (iii) El "objeto específico" que pueden llevar a cabo las SAG, debe cumplir con los requisitos generales que establezca la CMF, mediante normas de carácter general. Particularmente, tales requisitos generales están prevenidos en el Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF, titulado "Inversiones y Sociedades en el País" (en adelante, "Capítulo 11-6").

Argumenta que, conforme el artículo 75 de la Ley General de Bancos, *"(L)a Comisión tendrá a su cargo la fiscalización de las sociedades a que se refieren los artículos 70 y 74, y estará facultada para dictar las normas de carácter general a que dichas sociedades deberán sujetar sus operaciones según el giro que realicen"*, de

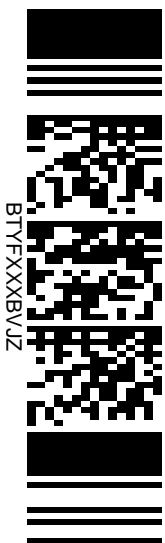


manera que cabe concluir que las SAG no sólo deben ajustarse al giro exclusivo establecido en el artículo 74 de la citada Ley, sino que también deben sujetar sus operaciones a las normas que la CMF dicte al efecto

Afirma que la actividad comercial del reclamante no se enmarca puramente en un negocio de carácter societario y privado, haciendo presente que la regulación en detalle de estas sociedades está contenida en el Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF, titulado "Inversiones y Sociedades en el País" y la función de supervisión la cumple la CMF, la que, de conformidad al artículo 75 de la Ley General de Bancos, se concreta a través de diversos medios e instrumentos de control de la gestión de dichas entidades, y que se extiende desde su constitución hasta su disolución y liquidación.

En este contexto, refiere que el bien jurídico, o la necesidad y finalidad social protegida por el legislador, es la solvencia bancaria y su correlato inmediato, la protección del dinero del público depositante; pues una apertura indiscriminada a las actividades que pueda realizar una SAG implicaría que estas entidades pongan en riesgo el capital que los bancos hayan aportado, y que proviene, a su vez, de los depositantes en estas últimas empresas. Se trata, entonces, de una prohibición legal fundada en los principios rectores en la materia.

Afirma que no se ha verificado, con la dictación del acto impugnado, una infracción al artículo 74 de la Ley General de Bancos y que malamente los estatutos de Transbank S.A. podrían contemplar una actividad económica que excede a la que pueden realizar las SAG, aún aquellas vinculadas a los medios de pago. En



efecto, la reclamante corresponde a una SAG cuyo único objeto es "*prestar servicios destinados a facilitar el cumplimiento de las entidades financieras*", en términos de lo dispuesto en el literal a) del artículo 74 la Ley General de Bancos.

Afirma que tampoco es efectivo que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en su oportunidad, haya autorizado el ejercicio de los servicios consultados, como aduce Transbank S.A..

Expone que, conforme la preceptiva reseñada, la CMF determinó, ante la consulta originaria, que Transbank S.A. podía transmitir información relacionada a los medios de pago que opera, pero no aquella referida a pagos efectuados por otras vías, como el efectivo, ya que esta última actividad implicaría exceder el marco de actuación establecido para esta SAG particular y que nada añade al caso el hecho de que la reclamante esté inscrita como operadora de tarjetas de pago, en el registro que al efecto lleva este servicio

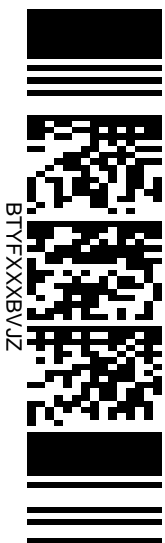
Así mismo, sostiene que la eventual "amplitud" de las actividades autorizadas por esta Comisión en el Anexo N° 2 del Capítulo 11-6, no puede justificar que Transbank S.A. pueda llevar a cabo actividades económicas que excedan el giro de las SAG. Al efecto describe las actividades que la CMF ha autorizado para que las SAG vinculadas a medios de pago puedan llevar a cabo, lo que no significa que cualquiera de las SAG existentes pueda desarrollarlas libremente, ya que para ello debe ser previa y específicamente autorizada por la CMF conforme a la normativa vigente. En suma, sostiene que, malamente las SAG podrían prestar un servicio que facilite un fin que no es propio de una empresa bancaria.



En el mismo sentido, refiere la inexistencia de infracción al artículo 3° del Decreto Ley N° 211, en cuanto no es la "interpretación administrativa" de la CMF la que habría impedido que Transbank S.A. lleve a cabo los servicios consultados, sino que la ley. Conforme lo anterior, no puede sostenerse que la CMF transgrede las normas de libre competencia respecto de entidades cuyo giro la ley prescribe que es exclusivo.

Sostiene que no se han infringido los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, toda vez que el acto impugnado cumple cabalmente con el principio de motivación de los actos administrativos, pues de su sola lectura fluye que contiene fundamentos tanto de hecho como de derecho, con independencia que el reclamante pueda discrepar de su contenido. Explica que no debe desatenderse el contexto del giro legalmente restringido de las SAG, lo que significa que los entes gobernados bajo este principio sólo pueden llevar a cabo las actividades económicas que la ley les permita.

Acerca de la infracción que se denuncia al artículo 37 bis de la Ley N° 19.880, la estima inconcurrente por cuanto, se trata de un acto singular al que no se aplica este régimen, en la medida que tiene como destinatario específico a una o varias personas debidamente identificadas y no, como en los generales, a "un número indeterminado de personas". En este sentido, la Carta y la Resolución impugnada son conceptualmente actos singulares o particulares, toda vez que están dirigidos exclusivamente a Transbank S.A. en su calidad de destinatario exclusivo de dichos actos. Precisan que una cosa tiene que ver con el interés que puede suscitar el contenido de un acto particular para diversos individuos;



pero otra cosa es pretender que, por ello, el acto tiene más destinatarios que los que realmente tiene.

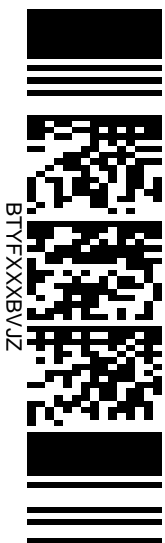
Por otro lado, alega que determinar si los servicios consultados se enmarcan o no dentro del giro exclusivo que deben observar las SAG, es una materia de competencia exclusiva de la CMF, lo que ya es suficiente para desacreditar la primera causal de procedencia del trámite prescrito en el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880.

Sobre el daño alegado de contrario replica que Transbank S.A está haciendo responsable a la CMF por un riesgo que ella decidió correr, al no esperar un pronunciamiento de la CMF antes de efectuar las inversiones que invoca. En otras palabras, el daño que Transbank S.A. alega es producto de su propio actuar, sin que tenga injerencia alguna al respecto el tiempo transcurrido en la dictación de la Carta N° 92108418 y de la Resolución impugnada.

Finalmente, invoca la inexistencia de perjuicio acreditable. Expresa que la demostración del perjuicio efectivo y directo es un elemento esencial para configurar la legitimación activa en la acción de ilegalidad de los actos de la CMF, y al contrario de cómo lo entiende la empresa reclamante, no es suficiente el referirse a perjuicios genéricos y abstractos, anteriores al acto reclamado, o la sola especulación acerca de un perjuicio probable y/o eventual para que la nulidad proceda.

En la conclusión pide se rechace en todas sus partes la reclamación de ilegalidad deducida, con costas.

**Tercero:** Que compareció en calidad de coadyuvante de la reclamada, el abogado Nader Mufdi Guerra, en representación de Vessi SpA, sociedad del giro de prestación de boletas electrónicas, invocando que con fecha 26 de octubre de 2020, presentó una



consulta a la CMF sobre si las sociedades de apoyo al giro bancario en general, y en particular Transbank S.A. pueden constituirse como un prestador de servicios de certificación para los efectos de emitir boletas electrónicas, la que fue resuelta en idénticos términos a lo respondido a Transbank S.A. a través de la Carta respuesta.

Converge en la pretensión de la CMF acerca de la improcedencia que Transbank S.A. exceda su giro y hace presente que, a pesar de los pronunciamientos de la CMF, la reclamante sigue prestando el servicio de emisión de boleta electrónica, en evidente infracción de lo dispuesto en los pronunciamientos de la CMF y del citado artículo 70, inciso final, del citado Decreto Ley N° 3.538.

Refiere que, en caso de acogerse el reclamo de ilegalidad de estos autos, se estaría entregando una “carta blanca” a Transbank S.A. para seguir prestando el servicio de emisión de boletas electrónicas, en abierta infracción a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley General de Bancos, limitando las posibilidades de que su representada desarrolle su negocio.

**Cuarto:** Que, el acto impugnado en esta sede contenciosa anulatoria de ilegalidad, corresponde a aquel situado en la clausura del procedimiento administrativo aplicado. Se trata de la Resolución Exenta N° 7144, librada el día 6 de diciembre de 2021, por la que el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero rechazó la reposición deducida contra la Carta N° 92108418 de 15 de octubre del año 2021, confirmando de esta forma lo resuelto inicialmente por el mismo organismo y plasmando una decisión administrativa concluyente.





En tales condiciones, lo impugnado es la desestimación de lo pedido, que se materializa con la ejecutoriedad de la Resolución N° 7144 por la presente vía, según se concluye de atenderse a la fisonomía que adoptó el recorrido procesal administrativo —con pronunciamiento intermedio y reposición admitida y fallada— y la apreciación integral de lo actuado en ejercicio de una potestad pública, plasmando una voluntad fruto de su ejercicio. Este criterio evita liberar áreas de apoderamiento bajo una suerte de preclusión por fases o etapas, como pretende la reclamada, con la consecuente oclusión del control judicial en determinados supuestos, como cuando se ejercen los remedios o recursos administrativos, según aconteció en este caso. Además, este criterio aparece refrendado por la suspensión que consulta el artículo 54, inciso 2°, de la Ley N° 19.880 bajo la voz genérica “reclamación” y la expresión “resuelve” de que se vale el precepto, con énfasis en la apreciación integral de la plasmación de una voluntad pública bajo las condiciones formales previstas en la ley.

De lo expuesto se sigue que, al haberse entablado la presente reclamación dentro del plazo de 10 días hábiles procesales que prevé el artículo 70, inciso 5°, de la Ley N° 21.000, mal puede concluirse su extemporaneidad. Luego, la alegación inicial de la reclamada dirigida a esa declaración será desestimada, como se dirá en lo resolutivo.

**Quinto:** Que, conviene precisar para el análisis sucesivo, cuál fue la petición formulada por Transbank S.A. a la Comisión para el Mercado financiero. Según es vertida en la misiva de 27 de enero de 2020 que da origen al procedimiento administrativo, ésta corresponde a que se “(...) *emita pronunciamiento especial respecto*



*de la emisión de Boleta Electrónica que la Compañía se encuentra desarrollando, en el sentido de confirmar que se encuentra comprendido dentro de su giro específico o se autorice de la manera que estime pertinente dicha autoridad”.*

Ahora, sobre la referida emisión que desarrolla Transbank S.A. se expresa en el cuerpo de la misiva indicada que se trata de la expansión de un servicio que se presta, extendiéndolo a todas las transacciones de los establecimientos afiliados de manera que “(...) *la plataforma tecnológica de operación de transacciones con tarjeta de pago de Transbank sea utilizada para el servicio de registro y envío de sus boletas por medios electrónicos, independientemente del medio de pago utilizado y del formato (papel o electrónico) con que opere el respectivo establecimiento*”. Luego precisa la epístola que se trata del “(...) *proyecto de proveer el servicio de envío de boleta electrónica al comercio afiliado (...)*”.

Por ende, en su solicitud a la administración, las peticiones de Transbank S.A. se contraen a dos requerimientos planteados bajo conjunción disyuntiva:

- (i) Uno de orden meramente declarativo, esto es, que se confirme que su giro la autoriza a emitir boletas electrónicas de ventas y servicios, cualquiera sea el medio de pago empleado.
- (ii) Otro de naturaleza constitutiva, esto es, que derechamente se le autorice a la referida emisión, fijando las condiciones para proceder al efecto.

Expresado en términos simples, de lo expuesto se sigue que la pretensión de Transbank S.A., incoada en sede administrativa, no es otra que se le autorice el empleo del voucher emitido a través del



sistema POS y las redes asociadas, como boleta electrónica, con independencia de la forma de pago utilizada en el comercio, erigiéndose así en un emisor rutinario de boletas de compras y servicios pagados en dinero en efectivo.

De consiguiente, la petición resuelta en sede administrativa y que se estima dirimida de modo ilegal no es, como en algunos pasajes de su impugnación refiere Transbank S.A., que se le permita prestar un servicio consistente en facilitar su plataforma tecnológica para la transmisión electrónica de información de pago que, a su vez, habilita a un tercero a prestar el servicio de BVE a sus comercios afiliados. Dicho de otro modo, la actora sustenta, en relación con el proceso administrativo, haber demostrado que presta un servicio consistente en facilitar su plataforma tecnológica para la transmisión electrónica de información de pago que, a su vez, habilita a un tercero a prestar el servicio de BVE a sus comercios afiliados.

Sin embargo, la solicitud de Transbank S.A, difiere en dos puntos fundamentales: (i) comprende al empleo de dinero en efectivo como medio de pago del bien o servicio comprendido en la transacción y (ii) alcanza la operación completamente autónoma de Transbank S.A., al extremo que es dable esperar que una vez que fuere dispensada la venia de la CME, impetrará la correspondiente autorización de emisión de boletas para toda operación, con cualquier forma de pago, ante el SII.

Así lo comprende, además, la reclamada cuando sostiene, oponiéndose a la acción que, la CMF determinó, ante la consulta originaria, que Transbank S.A. podía transmitir información relacionada a los medios de pago que opera, pero no aquella



referida a pagos efectuados por otras vías, como el dinero en efectivo, desde que esta actividad excede el marco de actuación reconocido a quien acciona.

No es óbice para esta conclusión, relativa a los márgenes de la petición de la administrada, su solicitud complementaria de 15 de julio de 2021, remitida al Director General de Supervisión Prudencial de la Comisión para el Mercado Financiero, desde que ella tiene un afán meramente informativo o instructivo, acerca del estado contingente de las operaciones de cuatro partes y sus bondades, encerrando, a lo sumo, la pretensión de reflejar un proceder correcto y eficiente. En efecto, como hidalgamente expresa, su propósito es *“informar el alcance del servicio de Acepta S.A. prestado a través de las redes de Transbank S.A. y las consideraciones sociales y normativas que (...) permiten su ejecución”*. De hecho, en referencia a lo pedido en la Carta de 27 de enero de 2020 se expresó que Acepta S.A. cuenta con las autorizaciones necesarias para emitir boletas electrónicas, de manera que desde el mes de octubre de 2020 Transbank S.A. comenzó a aportarle sus redes y plataforma tecnológica, facilitando la comunicación electrónica para la emisión. En el mismo sentido, indica la segunda misiva que Acepta S.A. *“(...) presta el servicio de emisión de boleta electrónica, mientras que Transbank aporta su infraestructura tecnológica (red POS), su fuerza de venta y sus servicios de atención al cliente para facilitar la prestación de los servicios de Acepta S.A. a los comercios afiliados a Transbank que deseen contratarlos”*. Afirma luego que *“(...) la emisión de la boleta electrónica propiamente tal es ejecutada por Acepta S.A. y Transbank sólo provee una infraestructura tecnológica y los canales*



BTYFXXXBVJZ

*para que Acepta S.A. provea el servicio al comercio afiliado a Transbank”. En la conclusión expresa que “En atención a lo señalado y a las disposiciones citadas, le rogamos tener presente las consideraciones esgrimidas en esta presentación, para los fines que se estimen pertinentes”.*

Como aparece de su dicción, la última presentación dirigida a la reclamada, datada el 15 de julio de 2021, persigue ilustrar un supuesto periférico de intervención respecto de las actividades comprendidas por la petición inicial, pero sin alterar o modificar la solicitud por ella planteada a la autoridad, debiendo concluirse que estas permanecieron inalteradas derivando en el pronunciamiento inicial en la Carta N° 92108418 y conclusivo a través de la Resolución Exenta N° 7144.

No puede soslayarse que, en los términos que dispone el artículo 1713, inciso 1°, del Código Civil, la impugnante reconoce que se requiere autorización para emitir boletas, al asumir que la intervención de Acepta S.A. viene a colmar lo que esta inhibida de realizar por sí. Luego, como se viene concluyendo, es el alzamiento de esa limitante lo que impetra, a través de una propuesta de interpretación de la normativa que estima aplicable la que, por no ser compartida por la CME, se resuelve en la imputación de déficits en la motivación, que impregnan todas sus alegaciones.

En consecuencia, como se dijo, la segunda misiva en análisis ilustra sobre un caso en que Transbank S.A. opera sin necesidad de contar con autorización para emitir boletas electrónicas, en circunstancias que su solicitud es precisamente que se le permita hacerlo. Esta conclusión fuerza a relegar el contenido de esta misiva al mero propósito de dar cuenta de un modo contingente de operar



que no desafía la prohibición, la que, además, implícitamente se reconoce, como se ha indicado, de manera, además, de patentizar que en su proceder observa lo dictaminado por la CME y las normas legales en que sus determinaciones se amparan.

En suma, la complementación en análisis no altera la petición inicialmente entablada ante la CME ni es autodenuncia del incumplimiento de la normativa aplicable, sino una forma de ilustrar a ésta sobre cómo se ha procedido frente a la inhibición que sufre Transbank S.A. de emitir boletas electrónicas; carencia que es suplida por Acepta S.A.

**Sexto:** Que, en tales condiciones, observando debida correlación con lo pedido, la CME desestimó, por su incompatibilidad con el ordenamiento jurídico sectorial en vigor, la petición que singulariza en lo expositivo de la Carta respuesta N° 92108418 de 15 de octubre del año 2021. Claramente ésta se refiere en la Carta respuesta indicada, en armonía con lo asentado en el motivo que precede, como aquella dirigida a que se emita *“(…) un pronunciamiento respecto al servicio de emisión de boleta electrónica de ventas y servicios afectas al Impuesto al Valor Agregado, con independencia del medio de pago utilizado en la transacción que le da origen, que su representada pretende suministrar, “[...] en el sentido de confirmar que -dicho servicio se encuentra comprendido dentro de su giro específico o se autorice de la manera que estime pertinente [...].”* Posteriormente, esta determinación fue confirmada, sin modificaciones, por la Resolución Exenta N° 7144, impugnada en esta sede jurisdiccional.

En suma, no ha sido objeto de pronunciamiento del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, al no haberse éste



recabado a la autoridad administrativa referida, la procedencia legal la actividad descrita en la comunicación de 15 de julio de 2021. De ello se sigue que, no mediando decisión sobre el punto, más puede desencadenarse su control vía la presente acción de ilegalidad, con lo que esta Corte carece de facultades para extender su decisión a todo aquello concernido por la colaboración con Acepta S.A. que es narrado en el referido complemento de orden meramente ilustrativo.

**Séptimo:** Que, al desestimar la solicitud de la administrada Transbank S.A., la CME se amparó en dos órdenes de circunstancias normativas fundamentales:

- (i) Lo preceptuado por el artículo 74, inciso 1°, de la Ley General de Bancos, en relación con las disposiciones de los artículos 40 y 69 de dicha legislación, en cuanto establecen el rubro acotado de las actividades que pueden realizar los bancos, que es espejo de aquellas que pueden realizar las compañías dirigidas a poyar su giro.
- (ii) Las normas del Párrafo 2° del Título III del Capítulo III. J.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, en cuanto imponen la observancia de la legislación y reglamentación aplicable al operador de tarjeta de pago, en caso de que se encuentre constituido como sociedad de apoyo al giro bancario, en los términos y condiciones que establezca la Comisión de conformidad con sus atribuciones legales privativas.

En el contexto del mercado financiero chileno, la respectiva intermediación se encomienda, fundamentalmente, a los bancos



nacionales, cooperativas de ahorro y crédito y bancos extranjeros. Estas entidades llevan a cabo actividades intensamente reguladas y controladas en función del interés general involucrado en su gestión, vinculado a su incidencia en la economía, debiendo estructurarse conforme la ley y operar un giro exclusivo y excluyente. Este objeto social, aunque se ha visto ampliado tras sucesivas modificaciones legales, no admite componentes vía analogía ni procede a su respecto una interpretación de ese carácter (analógica) o de orden extensivo. Se trata, en el caso de los bancos, del núcleo demarcado por las captaciones y colocaciones, sea en forma de mutuo, de descuento de documentos o en cualquier otra forma, propias de la intermediación financiera de que tratan los artículos 40 y 69 de la mencionada legislación, a las que se agregan las “demás operaciones que autorice la ley”, tales como factoraje, asesoría financiera, custodia o transporte de valores, o la cobranza de créditos, entre otras expresamente previstas en la ley.

Luego, bajo un paradigma de legalidad estricta, sólo las actividades expresamente previstas y fundamentales para los bancos están autorizadas, no así aquellas de rendimiento para otros fines en relación a los mercados en que actúan estas entidades, incluso aquellas que pudiesen relacionarse con intereses generales, tales como las de facilitación o integración en materia de fiscalidad y control de la elusión o evasión tributarias.

Es en el margen de estas “demás operaciones que autorice la ley”, que los bancos pueden ser accionistas o tener participación en sociedades de apoyo al giro bancario, de las que se ocupa el Párrafo 2 del Título IX de la Ley General de Bancos.





Estas sociedades, según prevé el artículo 74, inciso 1°, de la legislación citada, deben contraer su objeto a los siguientes rubros:

- (i) Literal a) del precepto. Servicios de facilitación del cumplimiento de los fines de las entidades financieras.

Respecto de este objeto, no se advierte cómo la emisión de boletas electrónicas por cualquier clase de transacción, pueden quedar comprendidas.

- (ii) Literal b) de la disposición. Dispensar su mediación a los bancos para que estos puedan efectuar operaciones determinadas del giro bancario con el público, salvo captar dinero. En relación a este ámbito, la emisión de boletas electrónicas no es una actividad del giro bancario, por no contar los bancos con autorización legal para proveer dicho servicio de raigambre impositivo.

La preceptiva que contiene el Párrafo 2° del Título III del Capítulo III. J.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, preserva la limitante interpretativa que se estima configurada en la especie, bajo la cláusula *“sin perjuicio de observar la legislación y reglamentación que resulte aplicable a dicho Operador en caso que se encuentre constituido como sociedad de apoyo al giro bancario, en los términos y condiciones que establezca la Comisión de conformidad con sus atribuciones legales”*. Esta previsión normativa se ocupa de emplear, en relación con sus preceptos generales sobre todos quienes ejerzan actividades de operación de medios de pago electrónicos, incluidas las empresas de apoyo al giro de los bancos, los límites legales que en estos autos y en su propia reglamentación, defiende la Comisión reclamada.



En las condiciones reseñadas, certeramente el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero negó lugar a la autorización requerida por Transbank S.A. disintiendo de la interpretación progresiva del alcance del giro autorizado a las referidas sociedades de apoyo que enarboló el impugnante, sobre la que se volverá más adelante, desestimándola. Sin perjuicio, en lo que aquí interesa, la decisión impugnada se funda satisfactoriamente en el régimen aplicable a las sociedades de apoyo al giro bancario y su comprensión a la luz del interés público que subyace al orden de reglas especiales aplicables, sin que otras vertientes que capten aspectos diversos de la actividad de estas compañías consigan alterar esta conclusión.

**Octavo:** Que, la inderogabilidad particular del reglamento, nada aporta a las pretensiones de la actora Transbank S.A. en lo que se viene decidiendo. En efecto, las disposiciones del Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF, titulado "Inversiones y Sociedades en el País" y su Anexo 2, no permiten fundar la procedencia de la venia que impetra la reclamante.

El citado Capítulo 11-6, en su acápite III, punto 1°, reitera las disposición de los incisos 1° y 2° del artículo 74 antes citado, en tanto que su Anexo 2 enlista tipos de servicios que la CME ha autorizado para la constitución de empresas de apoyo al giro. Se los divide en tres rubros:

a) Servicios vinculados a sistemas de pago. En su último ordinal consulta una aparente apertura al reiteras el rubro general de “servicios vinculados a sistemas de pago”, a cuyo respecto persiste el criterio restrictivo abonado por la *ratio legis* del régimen de que se trata en el ámbito del mercado financiero



b) Prestamos. Acápite de suyo ajeno a la cuestión debatida.

c) Otros servicios. Alude a la recaudación de impuestos, sin que por ella procesa comprender a la emisión de boletas electrónicas de ventas y servicios, cuestión que exigiría una prestación normativa atinente, cuando menos, al género del servicio de emisión de documentos tributarios.

Por otro lado, en lo pertinente a la Circular N° 1 sobre empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias, de 28 de noviembre de 2017, que cita la reclamante, este instrumento normativo consulta referencias que en nada permiten alterar lo concluido. En la preceptiva que contiene, el énfasis está en el control de los riesgos de la actividad de que se ocupa, deberes de informar, del uso de los datos y fiscalizaciones. En su acápite II, parágrafo 1.2, dispone que los estatutos de las compañías emisoras deben considerar como objeto social exclusivo la emisión de tarjetas de crédito y/o pago con provisión de fondos, según corresponda, sujetándose a las normas sobre la materia del Compendio de Normas del Canco Central que cita; remisión que considera *“todas las actividades necesarias para desarrollar el objeto exclusivo, como puede ser el caso de la autorización y registro de las transacciones efectuadas con las tarjetas que emita, la afiliación a establecimientos comerciales o la liquidación y/o pago de las prestaciones que adeude a dichos establecimientos”*. De ello se sigue que la norma discurre acerca de que queda comprendido en el giro de las emisoras de tarjetas todo lo necesario para ejecutarlo, sin que ello implique en modo alguno que es condición indispensable para ese objeto el quehacer nuevo que se propone de emitir boletas electrónicas por ventas y servicios, cualquiera sea el medio de pago.



De la manera expuesta, la reglamentación a que apela el impugnante, en nada contribuye a derrotar el predicamento restrictivo de la CME, desde que carece de rendimiento para ampliar sus márgenes. Se trata de disposiciones generales que tienen un objeto de referencia ajeno a lo que se pretende y de la previsión de una casuística de autorizaciones precedentemente libradas a compañías de apoyo al giro bancario, que no denotan ni connotan la emisión de boletas electrónicas.

**Noveno:** Que, según lo razonado en el basamento que precede, el acto impugnado cuenta con una fundamentación correcta y suficiente. De este modo el capítulo que se asila en una infracción al artículo 11 de la Ley N° 19.880, debe ser desestimado al carecer de base idónea. En efecto la Resolución Exenta N° 7144 se ampara en que la prohibición que constata, no se alza o cancela por virtud de las normas que invoca la actora, desde que éstas presuponen la validez de la ejecución del giro por parte de las sociedades especiales que prevé la legislación del mercado financiero y específicamente, la Ley General de Bancos y reglamentación complementaria.

Luego, en lo pertinente a los restantes capítulos de impugnación planteados en el reclamo, son vertidos planteamientos que no corresponden a componentes faltantes de la motivación del acto, de aquellos que determinan el carácter incompleto o insuficiente de su fundamento, al punto que de colmarse éste con las reflexiones ausentes, se levantaría o cancelaría la prohibición asentada en el motivo que precede para las sociedades de apoyo al giro bancario. Las normas que esgrime el impugnante no tornan



permitido una actividad que la legislación directamente aplicable prohíbe a las mencionadas empresas de apoyo.

Como se dijo, tal no es el caso desde que las alegaciones del impugnante se articulan a partir de otras secciones del ordenamiento, las que, de una parte, presuponen que la actividad de la empresa cuente con la aprobación del derecho y, por la otra, se hacen cargo de aspectos que no guardan relación, no pretenden erigirse, ni pueden ser interpretados, como excepciones o reglas especiales de modo que confieran poderes —normas propiamente constitutivas— en un contexto en que éstos son negados, como acontece con las restricciones en materia de estructura, objeto, giro, terminación y liquidación, entre otros, de los bancos y sociedades de apoyo a su guro, de conformidad con la legislación bancaria.

El norte de las previsiones legales que convoca el impugnante en materia de libre competencia y tributación a las ventas y servicios es que, ya colmadas las exigencias sectoriales de licitud, se resguarden otros valores, tales como la integración y eficiencia tributaria, la libre concurrencia, la protección de los consumidores u otros. Aún a riesgo de reiteración debe asentarse que éstas no son normas que autoricen a los bancos y sociedades de apoyo, a llevar adelante fines, objetivos u operaciones que proscribe la normativa especial que les es aplicable. No son, en consecuencia, motivos o causales legales de permisión o levantamiento de una prohibición que, de omitirse en el razonamiento de la autoridad, vician el acto.

Así, sin perjuicio que no se explicita ni desarrolla de qué modo la conducta del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero correspondería a alguna de las hipótesis genéricas o específicas que prevé la disposición del artículo 3° del Decreto Ley



Nº 211, sólo resta concluir que no se comprende cómo su decisión de actualizar los límites que prevé la Ley General de Bancos para las empresas de apoyo al giro, puede llegar a constituir, al mismo tiempo, un comportamiento “*que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos*”, en los términos del inciso 1º del último precepto citado.

Esta interpretación —que una norma obliga a realizar lo que otra prohíbe— no puede prosperar desde que los preceptos en juego tienen objetos de referencia distintos. Naturalmente, debe comprenderse que su invocación lo ha sido a mayor abundamiento en abono de la interpretación progresiva del impugnante que no advierte prohibición para emitir boletas electrónicas tratándose de las sociedades de apoyo al giro bancario, pero esta *ratio decidendi* propuesta por quien acciona, como se dejó en claro *infra*, no es compartida por las reflexiones que preceden. Ahora, no puede soslayarse que del modo descrito queda en evidencia que la vulneración al Decreto Ley Nº 211 sólo tendría lugar de haber prevalecido la interpretación que la reclamante ofrece de la Ley General de Bancos, de manera que este vicio carece de autonomía, al depender del primer motivo esgrimido en la reclamación, esto es, un error en la interpretación de la normativa sectorial.

En lo pertinente al arreglo de colaboración, cooperación y coordinación previsto en el artículo 37 bis de la Ley Nº 19.880, cuya desaplicación denuncia la actora, lleva razón la Resolución Exenta impugnada cuando sostiene que el pronunciamiento que se demanda por Transbank S.A. es de orden particular y, de consiguiente, no se configura el supuesto básico para su diligenciamiento. Sobre el particular, del carácter potencialmente



generalizable de una decisión, al aplicarse a todo aquel que se encuentre en la misma situación en que reposa lo decidido, no se sigue sin más su carácter general, en el sentido de aplicarse a alguna cohorte o género de destinatarios. Se trata de “[...] *que el objeto [...] general considera a los súbditos en cuanto cuerpos y a las acciones como abstractos: nunca toma a un hombre como individuo ni una acción particular*”. (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Contrato Social. Madrid, Espasa Calpe S.A. 12ª ed., 2007, p. 67).

Por otro lado, no se demostró que, al margen de la propuesta interpretativa de Transbank S.A., el SII sustente la interpretación que éste esgrime en su reposición y reitera en el reclamo de marras, de manera que no se configura el riesgo que se persigue conjurar, especialmente tratándose los afanes de integración y eficiencia recaudatoria, a criterios ajenos a la regulación bancaria. Mediante la huida a criterios dimanantes de otras regulaciones, la impugnante persigue alterar el carácter excepcional de los poderes conferidos por el ordenamiento a las compañías de apoyo al giro bancario, pero de ello no se sigue la demostración, siquiera a nivel de plausibilidad mínima, de que ese criterio es compartido por otros órganos públicos competentes en el mismo asunto. En tales condiciones, decae la exigencia prevista en el artículo 5º, inciso 2º, de la Ley N° 18.575, en relación con el arreglo que se estima omitido, esto es, que se esté en un escenario de riesgo de interferencia o duplicidad de funciones entre diversos órganos de la Administración del Estado derivado de interpretaciones encontradas.

Sobre la admisión en su giro de las operaciones que exige Transbank S.A., la normativa tributaria es derechamente accesoria, en el sentido que, tal como apunta la Resolución impugnada, se



limita a atribuir al recibo o comprobante de una transacción pagada por medios electrónicos, el valor de boleta de ventas y servicios, situación que no se extiende, según el tenor del artículo 54, inciso 1°, del Decreto Ley N° 825, a los pagos en dinero efectivo o, en general, ajenos al empleo de medios electrónicos de solución, que es de lo que trata la innovación que se incorporó al precepto por la Ley N° 21.210. No ofrece la disposición, en consecuencia, ni siquiera un principio de habilitación a aquello que pide a la administración la impugnante Transbank S.A.

En conclusión, no se configuran los vicios de ilegalidad que se atribuyen al acto impugnado ni aquellos que, al desestimar tales reparos, se le imputan por falta de fundamentación. No se está en el caso de la Resolución Exenta N° 7144 frente a un razonamiento incompleto como acusa el reclamante, desde que los contenidos que éste echa en falta no son pertinentes a la reflexión que correspondía plasmar por la autoridad, sino a cuestiones tangenciales que no son idóneas para determinar una conclusión opuesta o modificatoria de aquella que se alcanzó por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero.

**Décimo:** No puede soslayarse que la administrada, tratándose de un sujeto especial y experto, ha solicitado homologación para una actividad ajena a su giro legalmente autorizado, la que fue certeramente desestimada. En tales condiciones, acceder a sus peticiones requeriría una modificación legal por tratarse de un ámbito regulatorio en el que una interpretación que derive en una sentencia *ferenda* no es aceptable. En lo demás, la impugnante se apoya en otras vertientes del ordenamiento, no constitutivas en lo que al segmento de la actividad financiera se refiere, sino que





accesorias o complementarias en el sentido que no otorgan poderes a las empresas de apoyo al giro bancario, fuera de los márgenes estrictos que la legislación especial tolera.

**Undécimo:** Que, habiéndose desestimado todos los reparos de legalidad vertidos en el reclamo en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, por la dictación de la Resolución Exenta N° 7144 de 6 de diciembre de 2021, se dispondrá su rechazo, como se dirá en la conclusión.

Sobre la exigencia de perjuicios como consecuencia del acto tachado de ilegal que prevé el artículo 70, no habiéndose establecido dicha contrariedad a derecho, resulta inoficioso pronunciarse sobre este condicionamiento adicional, relativo a la producción de daños y su especie, a que se subordina de procedencia de la acción entablada.

En cuanto a las costas, la desestimación de la extemporaneidad alegada de contrario, determina que la actora no fue totalmente vencida en el presente juicio, de tal suerte que, acorde lo prevenido en el artículo 144, inciso 1°, del Código de Procedimiento civil, será eximida del pago de las costas.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Ley N° 3538, **se rechaza**, sin costas, la reclamación deducida por Transbank S.A. en contra de la Comisión para el Mercado Financiero por cuanto esta última no incurrió en ilegalidad en la dictación de la Resolución Exenta N° 7144 de 6 de diciembre de 2021, que rechazo'en todas sus partes el recurso de reposición en de la Carta respuesta N° 92108418, de 15 de octubre del año 2021.

**Redacción del Ministro (s) señor Carvajal Schnettler.**



**Regístrese y comuníquese.**

**Nº Contencioso Administrativo-626-2021.**

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, el Ministro (S) señor Rodrigo Ignacio Carvajal Schnettler y el abogado integrante señor Rodrigo Montt Swett.

No firma el Ministro señor Muñoz Pardo, por no encontrarse integrando Sala.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Suplente Rodrigo Ignacio Carvajal S. y Abogado Integrante Rodrigo Antonio Montt S. Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>